

México. Ante la encrucijada de su transición

Fernández-Menéndez, Jorge

Jorge Fernández Menéndez: Periodista mexicano, director de «Página Uno», suplemento político del periódico Unomásuno, y coordinador de investigaciones especiales de dicho medio. Miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ciudad de México.

Cuando dentro de un mes Carlos Salinas de Gortari pronuncie su cuarto informe de gobierno, el presidente de México estará definiendo el futuro de la transición política mexicana. Y es que la reforma económica, política y social se encuentra en un punto de no retorno pero sin haber alcanzado, todavía, la mayoría de sus grandes objetivos. Es un México donde ha nacido lo nuevo y en donde aún no muere lo viejo, en el cual se apuesta (y se impulsa) a la posmodernidad mientras persisten los argumentos y prácticas premodernos. Aceptada pero no siempre concertada, difícil porque se realiza desde el poder con el objetivo de transformarlo para mantenerlo, la transición mexicana está hoy ante un cruce de caminos, y de las decisiones que se adopten dependerán sus posibilidades futuras.

Y es que en la transición mexicana sin que se perciba oportunidad alguna de dar realmente vuelta atrás, tampoco hay nada totalmente definido. Desde que el primero de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari asumió el poder con el índice de popularidad más bajo del que gozara hasta esos momentos cualquiera de sus antecesores del México contemporáneo, los cambios han sido para algunos desconcertantes, para otros cosméticos, pero para casi todos vertiginosos, estableciendo una dinámica política impensable hace cuatro años. Ello es lógico si en México se quiere establecer un nuevo proyecto estratégico de nación: los presidentes mexicanos no tienen demasiado tiempo. El poder que detenta un mandatario mexicano, enorme en términos de otras democracias occidentales, se consume en poco más de cinco años. A los seis se pierde y la continuidad sólo puede establecerse a través de las posibilidades de afirmación de un proyecto estratégico. Hasta ahora sólo dos presidentes del período posrevolucionario lo han logrado: Lázaro Cárdenas, sinónimo de las políticas nacionalistas y verdadero artífice del ahora viejo y tradicional sistema político mexicano, y en mucho menor medida, Miguel Alemán, iniciador de la verdadera industrialización, de la virtual creación de una clase propietaria moderna a la que asoció íntimamente el sistema político creado por Cárdenas. Oscilando entre esos dos proyectos estratégicos, la vida política, social y económica

de México se desarrolló sin sobresaltos hasta 1968, cuando se comprobó - con la matanza de estudiantes en Tlatelolco - que el modelo se había agotado.

Durante los doce años siguientes se intentó renovar el modelo político sin cambiar sus verdaderas bases económicas y sociales de sustentación. Entre la política tercermundista de Luis Echeverría y la alucinación petrolera de José López Portillo, México deambuló sin un rumbo estratégico claro, con altas y bajas que concluyeron, en forma casi matemática, con derrumbes inevitables al fin de cada período sexenal. Cuando López Portillo abandonó el gobierno, en diciembre de 1982, en plena crisis de la deuda externa pero también de credibilidad y legitimidad política, se había llegado al límite: el modelo económico, social y político no sólo se había agotado sino que demostraba claramente que sin una reforma profunda la ruptura social y política sería inevitable.

Su sucesor, Miguel de la Madrid, decidió invertir el modelo seguido por sus dos antecesores. Abandonó todo protagonismo político y se abocó de lleno a tratar de sentar las bases de una reforma económica siempre postergada en sus medidas nodales por las exigencias económicas de la crisis. Su objetivo declarado era que el país no se le deshiciera entre las manos. De la Madrid lo logró pero a un alto costo social y político y cuando el 6 de julio de 1988 el cardenismo que había roto con el sistema obtuvo una votación oficial cercana al 30 por ciento, se comprobó no sólo que, como dijo tres días después el propio Salinas de Gortari, «el sistema de partido prácticamente único se había acabado» sino también que la reforma debería ser radical y atender, simultáneamente, lo político, lo económico y lo social. En lo primero para llegar a un sistema realmente democrático, en lo segundo para insertar la economía mexicana en los reales canales de productividad y competitividad internacionales y en lo tercero para arrancar de la pobreza extrema a 40 millones de mexicanos, la mitad de la población del país. Esas son las bases y los desafíos de esta transición mexicana que no termina de consolidarse.

Descubriendo la microeconomía

Si bien la transición mexicana no ha tenido un basamento teórico que así lo explicara, no cabe duda de que ha partido de la convicción de que la reforma económica no debía preceder a la política y social pero sí que tenía que sentar las bases materiales para ellas. La insistencia en los discursos oficiales de que la democracia no florece en la pobreza, mostró que el impulso político estaría destinado, en un inicio, tanto a establecer una reforma económica de fondo, radical, como a la instrumentación de un programa social que, con el tiempo se vería que tiene límites en

sus posibilidades como tal pero también insospechadas repercusiones y posibilidades políticas.

Lo cierto es que la reforma económica ha alcanzado ya, cuatro años después, la mayoría de sus grandes objetivos macro-económicos y su culminación, en ese sentido, se produjo con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá. En este sentido no deja de ser paradójico que, como ha ocurrido en otros sectores, el que constituye el punto paradigmático de esa reforma, el Tratado, al igual que otras decisiones adoptadas en lo social y político, no formaran parte del proyecto original del salinismo. Y segundo, que esas decisiones se hayan asumido de acuerdo a tiempos y exigencias internas que no siempre han coincidido con la mejor coyuntura exterior.

La propuesta del TLC no surgió, como lo sostienen algunas versiones maniqueas de la realidad mexicana, de una propuesta o exigencia estadounidense. Al contrario. Pese a que México realiza el 70 por ciento de su comercio exterior con Estados Unidos, lo que lo ha convertido en su tercer socio comercial mundial, la visión estadounidense sobre México (y de México respecto a Estados Unidos) estaba muy lejos de esa concepción de importante socio comercial.

Quizás por esa razón y pese a que existían tendencias casi inevitables para la formación de un bloque comercial con Estados Unidos y Canadá, durante muchos meses la administración Salinas se resistió a esa posibilidad. Hasta que en febrero de 1990, durante su primera gira europea, el propio Salinas de Gortari comprobó en el foro económico de Davos (Suiza) que su propuesta original de mantener a México con una economía abierta y con una equilibrada asociación comercial con Estados Unidos, la Europa comunitaria y la Cuenca del Pacífico había sido transformada por la caída, en noviembre de 1989, del Muro de Berlín. La política de bloques se imponía y para los inversionistas europeos y asiáticos, México se constituía en una opción interesante de inversión sólo en la perspectiva de que su profunda reforma económica interna consolidara su asociación comercial con el mercado estadounidense.

Dos meses después de ese recorrido europeo, la propuesta de Salinas había sido aceptada por Bush y en julio comenzó el cambio para la negociación del TLC. No cabe duda de que muchas de las medidas macro económicas posteriores estuvieron relacionadas con esa decisión, pero sería absurdo creer que se adoptaron subordinadas a ella. En los hechos, en términos estrictamente económicos, el TLC lo que hará será institucionalizar y regular unos lazos económicos y comerciales que ya

existen y que se han consolidado durante las últimas décadas. Por eso su importancia real no estriba tanto en las modificaciones estrictamente económicas y comerciales que implementará sino en ese aspecto de institucionalización y regularización.

Y es que la política mexicana de las últimas décadas ha sido sexenal. El que ninguno de los cuatro últimos presidentes (a pesar de los relativos lazos de continuidad entre la administración De la Madrid y la de Salinas de Gortari) haya podido establecer un verdadero proyecto estratégico que trascendiera su mandato obliga a la actual política a confirmar las tendencias instituidas por el salinismo no sólo en el plano político y económico sino también en el institucional. Y en este sentido pocos instrumentos son tan importantes como el TLC.

Pero mientras el Tratado parece avanzar con dificultades pero sin serios contratiempos (especialmente si se confirma el apoyo explícito de Bill Clinton a éste) la economía mexicana sufre presiones realmente serias. El esquema es sencillo: la economía está pagando los costos de sus propios éxitos. Y también de sus insuficiencias. La apertura ha provocado una intensa importación de bienes, acrecentada tanto por la leve expansión del consumo como por la creciente necesidad de insumos importados para las empresas. Según datos de la CEPAL proporcionados por el Banco de México, las importaciones crecieron, hasta mayo, el 28,9 por ciento y la tendencia era creciente. Pero las exportaciones apenas han crecido en el mismo período un 0,4% a causa del retroceso que ha sufrido la economía estadounidense, al cierre de algunos mercados internacionales a productos mexicanos y, también, porque muchas de las grandes empresas mexicanas parecen haber llegado a sus límites actuales de producción. Para sobrepasarlo requieren ahora de capitales e insumos... y mientras vuelven a estar en condiciones de incrementar su producción y capacidad de exportación el déficit comercial y de balanza de pagos crece.

El déficit comercial hasta mayo pasado era de 7 mil 585 millones de dólares, más del doble que en el mismo período del año pasado. Se calcula que a fin de año el déficit alcanzará unos 18 mil millones de dólares.

Y sin embargo la situación es difícil y compleja pero no crítica. Existen reservas internacionales por casi 20 mil millones de dólares (la cifra oficial se da a conocer cada primero de noviembre, con motivo del informe presidencial) incrementadas por los recursos provenientes de las privatizaciones de empresas públicas y las colocaciones de bonos en el exterior. La economía se ha desacelerado pero mantendrá una tasa de crecimiento de aproximadamente 2,3 por ciento y las autoridades eco-

nómicas han centrado su objetivo en reducir la inflación que, pese a todo, este año volverá a ser superior a un dígito. También hasta mayo, la tasa anualizada de inflación era de un 12 por ciento aproximadamente, de todas formas una tasa bastante menor a la de 1991 (de 18,8 por ciento) pero todavía muy alta para competir con Estados Unidos y Canadá.

Por eso, la tendencia para los próximos meses será profundizar en una política austera, relativamente restrictiva, por lo menos hasta lograr que las tasas de inflación se establezcan en aproximadamente un dígito. Por esa misma causa, pese a las presiones de la balanza comercial, difícilmente se devaluará el peso a tasas mayores de las actuales, aunque la entrada en vigor, el próximo primero de enero, de un nuevo sistema monetario (que quitará tres ceros a la actual moneda) podría ser utilizada para realizar algunos ajustes significativos a la paridad.

El problema es que la desaceleración y la etapa de ajuste que ella conlleva afectarán el nivel de vida. La recuperación salarial ha sido muy lenta, muchos más lenta de lo que algunos esperaban ante los éxitos macroeconómicos. Por eso el énfasis y el desafío ahora están en la microeconomía: en lograr que la sociedad perciba los beneficios de un programa económico que, en los hechos, ha provocado ya una década completa de sacrificios.

Aunque resulte paradójico (y ello demuestra la enorme transformación que ha tenido la economía mexicana en esta década) el mismo día de agosto que se anunció que el documento final del Tratado de Libre Comercio estaba listo, era el décimo aniversario del inicio de la crisis de la deuda externa. Ese mismo día, diez años atrás, el gobierno mexicano anunciaba a sus acreedores que no podría seguir pagando sus adeudos. Una década después se disponía a integrarse a un mercado abierto con Estados Unidos y Canadá. La diferencia es enorme pero, en ese mismo período, los salarios se han movido sólo a la baja: el salario mínimo real era en junio de este año el equivalente a sólo un 36 por ciento del de 1978, mientras que el salario manufacturero (el de un obrero calificado) sólo era un 7 por ciento mayor al del inicio de la actual administración, en diciembre de 1988. Es verdad que el decrecimiento de la inflación ha mejorado indirectamente el nivel de vida, pero definitivamente sin un mejoramiento ostensible de la microeconomía los costos sociales del programa seguirán siendo altos.

El desafío de la pobreza extrema

La pobreza no puede erradicarse sin una economía realmente competitiva, pero las exigencias políticas y sociales de México no permiten, tampoco, plazos muy largos para, por lo menos, mejorar la calidad de vida de la población. Por una parte, porque los sectores medios han visto descender drásticamente sus niveles de vida de los últimos años. Por otra, porque un 40 por ciento de la población, según estadísticas oficiales, vive en la pobreza y la pobreza extrema (aproximadamente 20 millones de personas en cada una de esas categorías). Y en esas condiciones difícilmente cualquier programa de renovación económica de largo plazo puede tener éxito.

Si en las elecciones del 6 de julio de 1988 la rebelión electoral se escenificó fundamentalmente entre las clases medias urbanas, la recuperación electoral del salinismo se fincó, tres años después, en esos mismos sectores que han sido los directamente beneficiados por la gradual recuperación económica, la apertura y el descenso de la inflación. Pero la reserva electoral real del PRI no está en esos sectores sino en los grupos rurales y los marginados entre los cuales los resultados macroeconómicos no se ha reflejado en sus vidas. En 1988, el intento del cardenismo de unificar las expectativas y demandas de las clases medias con esos sectores empobrecidos y marginados, de tener éxito, hubiera significado el fin del sistema político mexicano. De todas formas, los resultados electorales de 1988 demostraron que la política social del Estado mexicano con sus modelos paternalistas se había agotado y que ya no generaba apoyo social; más bien al contrario: en muchas de esas políticas se fincaban las razones del rechazo hacia el sistema.

El salinismo lanzó entonces el Programa Nacional de Solidaridad, una estrategia que buscaba la participación de las comunidades en la solución de sus propios problemas y que, administrativamente canalizaba hacia ellas los recursos federales en forma casi directa y con los mínimos requerimientos burocráticos. Implicaba, simultáneamente, el reconocimiento de la urgencia de reanudar el gasto social y también la aceptación de que las burocracias estatales y municipales, con su alta carga de corrupción, habían en buena medida inutilizado los viejos esquemas de distribución y gasto social.

Para sorpresa del propio gobierno, los réditos alcanzados por el Pronasol fueron y son enormes. Existen actualmente unos cien mil comités de Solidaridad formados en todo el país (a los que están integrados ciudadanos de todos los partidos políticos) que canalizarán recursos públicos superiores a los dos mil millones de dólares durante este año. El esquema de Solidaridad es sencillo y de allí en buena medida su éxito: una comunidad urbana o rural desea realizar una obra (electrificación, mejoramiento de escuelas, drenaje, etc.) y entonces se constituye en un comité de

Solidaridad cuyos directivos son escogidos democráticamente; presenta la obra a las autoridades de Pronasol en la localidad; en forma inusualmente rápida (si cubre los requisitos mínimos) recibe los recursos federales y éstos deben complementarse con dos cosas: la aportación de la propia comunidad en recursos materiales y, además, con su trabajo. Los recursos materiales recaudados para la obra por la propia comunidad quedan en ella para obras posteriores y en la medida en que han podido utilizar correctamente los recursos federales, partidas presupuestales similares pueden destinarse a las mismas comunidades para obras posteriores.

Esa retroalimentación y las posibilidades comunitarias de controlar sin burocracia la utilización de recursos ha provocado que en tres años de aplicación el Programa Nacional de Solidaridad maneje un presupuesto similar al de todas las presidencias municipales juntas del país, pero que, a diferencia de éstas, genere un sistema de participación en la toma de decisiones que afecta indirectamente a un entramado político en el cual los partidos, desde el oficial hasta los de oposición, están perdiendo en forma cotidiana presencia y representatividad real.

En este sentido no cabe duda de que Solidaridad es el gran éxito del salinismo y, muy probablemente su mayor legado político e ideológico. Pero no es suficiente para erradicar (ni es ése el objetivo del Programa) la pobreza extrema y la desigualdad, como tampoco puede reemplazar un verdadero sistema democrático y representativo de partidos, aunque influye directa o indirectamente en ambas problemáticas. En el plano económico no cabe duda de que deberá ser el proyecto estratégico el que evite el incremento del desempleo y, sobre todo, eleve los salarios reales que continúan seriamente deprimidos. Eso no lo puede hacer Solidaridad.

En el plano político existió en algún momento la idea de lanzar a Solidaridad con sus cien mil comités como partido político. Afortunadamente esa propuesta ya fue desechada porque hubiera acabado, en los hechos, con el programa, sus beneficios y también con sus posibilidades sociales: una cosa es reunirse, en forma plural, para realizar obras de beneficio comunitario con recursos públicos y otra, muy distinta, para suscribir un acuerdo político e ideológico y un programa de acción. Solidaridad puede permear los actuales estilos políticos corporativos de casi todos los partidos mexicanos pero no puede reemplazarlos.

Las dudas políticas del sistema

Pero incluso la sola posibilidad de que se haya hablado de transformar Solidaridad en instituto político demuestra la fragilidad del actual sistema de partidos. Los par-

tidos en México están en crisis y tratan de encontrar su nuevo rostro en una transición que ha sorprendido por su evolución al gobierno y por supuesto que a los partidos, acostumbrados hasta ahora, casi todos ellos, a un tipo de relación paternalista con el Estado (y populista y corporativista de ellos con la sociedad) que ha quedado rebasada por los hechos.

Lo cierto es que los tres grandes partidos mexicanos no encuentran, aún, su nuevo lugar. El Partido Revolucionario Institucional parece estar (pese a los esfuerzos de algunos ideólogos salinistas que han trabajado fuertemente en él) cada día más desconcertado respecto a su liderazgo real. En primer lugar, porque Salinas de Gortari, con la reivindicación del liberalismo social (una tesis histórica del liberalismo mexicano del siglo pasado pero que adaptada a las presentes circunstancias se asemeja mucho a las tesis de la socialdemocracia española) ha puesto en crisis muchos de los estereotipos revolucionarios que, desde la institucionalización del cardenismo, a fines de los 30, se había mantenido incólumes. Pero más que eso porque Salinas de Gortari ha aceptado derrotas electorales e indirectamente propiciado la separación, con ello, del partido y el Estado, una separación que muchos sectores del partido oficial no quieren, no asumen y temen, porque saben que significa, en buena medida, su propia desaparición.

Hoy en día el Partido de Acción Nacional, de centro derecha y opuesto históricamente al PRI, gobierna en tres estados y tiene grandes posibilidades de llegar al poder en dos más; controla varias de las principales presidencias municipales del país. En total, unos 15 millones de mexicanos viven bajo gobiernos panistas.

El sistema político mexicano tradicional no admitía derrotas, salvo en algunas presidencias municipales y, hasta el comienzo del gobierno de Miguel de la Madrid (1982), eso era en casos de verdad excepcionales. Y esa seguridad de victoria (los castigos políticos se realizaban por otras vías) era una de las más fuertes cartas para la estabilidad de todo el sistema político: no sólo para el oficialismo sino también para una oposición que no tenía posibilidades reales (ni responsabilidades) de cogobernar. La táctica de la oposición a ultranza funcionaba tan bien como la del oficialismo acrítico. Eso se ha roto y no se ha podido establecer un mecanismo idóneo para volver a encontrar el equilibrio político.

Sin embargo, existen atisbos importantes sobre nuevas posibilidades y ellas se han puesto de manifiesto en los últimos procesos electorales, cuyas repercusiones aún siguen determinando buena parte de la vida política nacional.

El punto básico sobre el cual se podría establecer ese nuevo equilibrio es una sociedad que no desea la ruptura, pero sí el cambio. Ello está determinando de todos los actores políticos una lucha por el centro del espectro político que es el que permite avanzar con más consistencia en la transición. Cuando las disputas políticas se dan por el cambio pero no por la ruptura, los comicios se dan con bastante transparencia y los resultados (y el propio proceso electoral) es limpio y moderno. Cuando la polarización entre el sistema político y la oposición es manifiesta visceralmente, cuando las opciones implican la más burda continuidad o la ruptura incluso violenta, el fenómeno ha sido, por una parte, el abstencionismo y, por la otra, el fortalecimiento de las fuerzas partidarias del statu quo de dentro del sistema, los llamados dinosaurios. Porque no debemos olvidar que la transición mexicana no proviene de fuera del sistema sino de su interior, y que las fuerzas partidarias de la transición (que en términos generales podemos identificar con el salinismo) están en conflicto con sus propias fuerzas partidarias. Y ese fenómeno entre renovadores y dinosaurios se registra, idéntico, en todos los grandes partidos.

Y es que el PRI (entonces Partido Nacional Revolucionario y luego Partido de la Revolución Mexicana) surgió como un conglomerado de fuerzas heterogéneas que habían participado de distinta forma en la revolución mexicana y que, al agruparse como partido, evitaron que sus diferencias y conflictos de poder se dirimieran en el terreno de las armas. Posteriormente la disciplina que en ese esquema impusieron primero Plutarco Elías Calles (su fundador) y luego Cárdenas (con la institucionalización del sistema en torno al fuerte presidencialismo sexenal) permitieron que las distintas corrientes del partido evolucionaran sin conflictos profundos y sin rupturas significativas. En realidad, la primera gran ruptura de ese esquema (ruptura que demuestra que ya ha llegado a su límite) se dio con el surgimiento en 1987 del neocardenismo que generó la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y que se nucleó, a partir de 1989, en el Partido de la Revolución Democrática, un conglomerado de fuerzas de izquierda, nacionalistas y opuestas al PRI que habían apoyado a Cárdenas en 1988.

Pero si esa ha sido la explosión más obvia de los conflictos internos en el partido oficial no implica que se la única. A partir de allí, el salinismo se dio a la tarea de transformar al PRI pero conciente de las resistencias internas y sin provocar nuevas rupturas. Y en todo ello la participación de la sociedad ha jugado un papel fundamental. Cuando en los recientes procesos electorales los partidos han apostado a la polarización (ante una sociedad que desea el cambio pero no la ruptura, fruto de uno de los pocos logros indiscutibles del viejo sistema: casi setenta años de estabilidad y paz social) la sociedad se ha replegado y los conflictos han quedado reduci-

dos a un enfrentamiento entre aparatos partidarios y sus sectores más intransigentes en los cuales los sectores más duros del oficialismo han logrado, siempre, imponerse. Y cuando no ha sido así, como en las elecciones estatales de Guanajuato o San Luis Potosí el año pasado, fue porque en ambos casos el salinismo no asumió su compromiso con los sectores duros de su partido ya que sus interlocutores de oposición funcionaron como tales.

Sin duda, nadie mejor que el actual grupo hegemónico del PAN ha comprendido esta situación. Este partido, que surgió hace 50 años con fuertes contenidos liberales y que posteriormente adquirió rasgos casi clericales, desde 1987, con la llegada de Luis H. Alvarez a su presidencia, se transformó profundamente y se reorientó hacia sus orígenes de centroderecha, supo captar las exigencias de la hora y las posibilidades que se le abrían en los marcos de la reforma salinista. Su oferta es precisamente el cambio sin ruptura, su apoyo (incluso a veces explícito) al salinismo en sus grandes líneas reformadoras (no en todas) al tiempo que expresa su más firme rechazo al sistema... que llevó a Salinas de Gortari al poder. Lo cierto es que sus éxitos políticos y electorales en estos tres años, utilizando exactamente esa misma táctica política, han sido crecientes y el reciente triunfo electoral en Chihuahua lo demuestra.

Este estado del norte del país (uno de los económicamente más importantes de la Federación) había registrado una victoria panista en las elecciones de 1986 que no fue reconocida por el gobierno de Miguel de la Madrid. Cuando seis años después el mismo candidato panista se presentó a la lucha electoral se supuso que iba por la revancha. No fue así: Francisco Barrio, el candidato en cuestión, se mostró como un hombre reflexivo, cuidadoso de las formas, que elogia públicamente a Salinas de Gortari y que desde su campaña electoral habló de la posibilidad de conformar un gabinete de amplio espectro político de llegar a la gubernatura. La elección se polarizó en siglas y candidatos pero no en un enfrentamiento político. Se estableció una disputa por el centro y ello se reflejó en el proceso electoral y la participación social: con la participación electoral más alta de la historia del estado, el PAN se adjudicó una apretada pero tranquila victoria en esa entidad, reconocida inmediatamente por el gobierno federal. Y en la primera semana de octubre Barrio Terrazas asumió la gubernatura, incluyendo a dos prominentes miembros del PRI en su gabinete, con la presencia de Salinas de Gortari, de otros gobernadores y de la dirección nacional de su propio partido.

El mismo 12 de julio en que se realizó la elección de Chihuahua, se realizaron los comicios en el estado de Michoacán, la cuna del cardenismo y en buena medida de

un PRD que ha apostado, casi todo, no a la transición sino a la caída del régimen. Con responsabilidades diversas, tanto del gobierno como de la oposición perredista, el panorama en que se desarrollaron los comicios michoacanos fueron la antítesis de los de Chihuahua: polarización política, golpes bajos, amagos de violencia, la apuesta (por encima de discursos) a la ruptura. Los candidatos del PRI y del PRD, desde seis meses antes de la elección hablaron de diálogo y acuerdos de civilidad y jamás intercambiaron una sola palabra, ni siquiera por teléfono, para poner en orden a sus respectivas fuerzas. El resultado era obvio: la sociedad no participó con ninguno de los partidos contendientes y el grado de abstencionismo fue muy alto, mientras la maquinaria electoral del PRI arrolló a la del PRD, pero ahora, ante la reticencia social, el oficialismo tampoco tiene el apoyo político y social que requiere para legitimar ese triunfo. El resultado es la crisis y una suerte de empate que ninguno de los dos partidos quiere reconocer como tal.

Chihuahua y Michoacán demuestran las posibilidades y limitaciones de la transición mexicana en el terreno político. Existe un ámbito en que esa transición se muestra viable y operativa, eficiente y sobre todo posible (a pesar de las trabas de los partidos del statu quo), con su reflejo natural: comicios limpios, resultados reconocidos por la mayoría de los actores, civilidad política entre los contendientes. Eso fue Chihuahua. Existe otro ámbito de conflicto sin solución, de polarizaciones políticas, de sentimientos de ruptura y conservación que hacen llevar la transición hacia un terreno incierto. Es verdad que la presencia de distintos actores modifica ese escenario y que por ejemplo los acuerdos del salinismo con el grupo hegemónico del PAN permiten un camino de transición que el enfrentamiento casi filial existente entre el PRI y el sector que controla el PRD (un partido también de muchas corrientes internas diferenciadas) invalida en forma casi automática.

Pero en última instancia, al igual que lo que ocurre en lo económico y social, para llevar la transición política mexicana por los caminos correctos todos los actores deberán completar su propia transformación y, sobre todo, partir de las exigencias de una sociedad que se corre el peligro de que deje de creer en los partidos si éstos no completan su propia transición interna y reflejan en su accionar y programas esas exigencias sociales. Ese es el verdadero desafío de la transición democrática en México.

Ciudad de México, 4 de octubre de 1992

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 122 Noviembre- Diciembre de 1992, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.